

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY EN SEDE JUDICIAL: SU CONFIGURACION POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (*)

FERNANDO BALLESTER LAGUNA (**)

SUMARIO

- I. LA IGUALDAD EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 Y LA IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY
- II. PRESUPUESTOS QUE HAN DE CONCURRIR PARA ENTENDER VULNERADO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY
 - 1. Que exista y se aporte un término de comparación adecuado
 - 1.1. Que se ofrezca como término de comparación una o varias resoluciones que sean temporalmente anteriores

(*) Estudio realizado bajo la dirección del profesor doctor don Francisco López-Tarruella, con motivo del Curso de Doctorado "Constitución y Derecho del Trabajo", Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, curso 1990-1991.

(**) Ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante.

- 1.2. Que se trate de resoluciones del mismo órgano judicial
- 1.3. Que se trate de resoluciones cuyos supuestos de hecho sean sustancialmente iguales
- 2. Que se trate de un cambio de criterio inmotivado o arbitrario

■ I. LA IGUALDAD EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 Y LA IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY

LA igualdad es una de las categorías fundamentales de la Constitución española de 1978 (en adelante, CE); ya en el artículo 1.1 de la misma se proclama la igualdad como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, convirtiéndose así en uno de los objetivos básicos que nuestro sistema jurídico-político se propone alcanzar y sirviendo de criterio interpretativo general de ese mismo sistema jurídico-político¹.

Pero el precepto clave en materia de igualdad lo constituye, sin duda alguna, el artículo 14 CE, donde se reconoce, con el más alto rango (art. 53.2 CE), el principio y, a su vez, derecho fundamental de igualdad y no discriminación², el cual debe ser completado con el mandato constitucional, dirigido a los poderes públicos, de promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva (art. 9.2 CE). De esta forma se conjugan en la propia Constitución —artículos 14 y 9.2, respectivamente— los dos planos básicos —formal y material— del principio de igualdad.

Pues bien, a este principio y, a su vez, derecho fundamental de igualdad y no discriminación (art. 14 CE) la doctrina constitucional viene atribuyéndole, a partir de una abundante jurisprudencia que arranca de 1981, dos vertientes, a saber:

1. *Igualdad en la ley*: consiste en la igualdad en el trato dado por la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, y constituyendo, desde ese punto de vista, un límite puesto al ejercicio del poder legislativo y reglamentario, que no podrán “configurar los supuestos de hecho de la norma de forma tal que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación”³.

2. *Igualdad en la aplicación de la ley*: principio que han de seguir los Tribunales y la Administración, en un estadio posterior, presupuesta la igualdad en la ley, y que “obliga a que ésta sea aplicada efectivamente igual a todos aquellos que se encuentren en la misma situación”⁴.

¹ Sobre la eficacia de los valores y, en concreto, de la igualdad como valor, véase PECES BARBA, G.: *Los valores superiores*, Tecnos, Madrid, 1984, págs. 151-152, y PEREZ LUÑO, A. E.: “Sobre la igualdad en la Constitución española”, en *Anuario de Filosofía del Derecho*, n.º 4 (Nueva Época), Madrid, 1987, págs. 141-142.

² Sobre la doble significación de la igualdad, como principio y como derecho fundamental, contenida en el artículo 14 CE, véase RODRIGUEZ-PINERO, M. y FERNANDEZ LOPEZ, M. F.: “Igualdad y discriminación”, en *Temas clave de la Constitución española*, Tecnos, Madrid, 1986, págs. 251 y sigs. En el mismo sentido, PEREZ LUÑO, A. E.: “Sobre la igualdad...”, *ob. cit.*, págs. 142 y sigs., donde se efectúa un análisis de la jurisprudencia constitucional al respecto.

³ STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 1.º

⁴ STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 1.º

No se va a ofrecer aquí un tratamiento de la temática general de la igualdad ni de las peculiaridades de su plasmación constitucional y su control jurisdiccional, tareas que cuentan ya en España con trabajos muy rigurosos. Se trata de un análisis circunscrito a esta segunda acepción del principio de igualdad —entendida como igualdad en la aplicación de la ley—, y en concreto la que atañe a los órganos jurisdiccionales⁵. En torno a la misma, el TCO ha elaborado a través de sus resoluciones una doctrina cuyos contornos están ya más o menos definidos y que va a ser objeto de este estudio⁶.

En una primera aproximación se puede afirmar, con palabras de VALDES DE LA VEGA, que el principio de igualdad en la aplicación de la ley (en adelante, PIAL) se traduce en “el derecho a obtener resoluciones (judiciales) idénticas para supuestos sustancialmente iguales”⁷. Pero, esta afirmación, por sí sola, dice bien poco del verdadero alcance de la igualdad en la aplicación de la ley, alcance que deberá ponerse en conexión con los requisitos de operatividad de aquélla exigidos por la justicia constitucional.

Así, entiende nuestro TCO que sólo el mismo órgano judicial está obligado a resolver igualmente los supuestos iguales sometidos a su apreciación. Y, aún así, puede proceder a un trato desigual siempre que lo justifique.

Pues bien, el análisis pormenorizado de todos y cada uno de estos presupuestos —qué se entiende por mismo órgano judicial, cuándo estamos ante supuestos sustancialmente iguales, cuándo ante un cambio de criterio válido...— que, por lo demás, vienen a configurar el PIAL, constituye el objeto de este trabajo. Y, a la vista de lo anterior, podría decirse, con toda certeza, que la postura general del TCO en el tema de la igualdad en la aplicación judicial del derecho obedece a la necesidad de dar efectividad al principio de igualdad que se trata de tutelar, sin merma de la independencia judicial que también está en juego. Esta es la problemática fundamental que plantea el PIAL en sede judicial, y en ese difícil y no siempre conseguido equilibrio se mueve nuestro TCO imponiendo, como se verá, sacrificios mutuos.

Pero antes de comenzar la exposición me parece conveniente hacer la siguiente puntualización. El PIAL es un principio general del Derecho y, como tal, vincula a todos los Jueces y Tribunales. La razón de una vertiente laboral del mismo —referirlo al orden jurisdiccional social—, que por lo demás se concreta en el estudio y ejemplificación de casos laborales, no es otra que la de ser ésta la perspectiva que me interesa desde mi óptica de iuslaboralista. Tampoco es baladí la cuestión de que estadísticamente, del total de asuntos conocidos por el TCO, más de un 60 por 100 viene referido a temas laborales, siendo más numerosas también las resoluciones del TCO sobre el PIAL en la rama social del Derecho.

⁵ La aplicación igual de la ley por parte de los órganos administrativos, pese a las notables similitudes que posee con la igualdad en la aplicación de la ley en sede judicial, presenta, no obstante, una dinámica distinta de actuación que no va a ser objeto de este estudio.

⁶ Para el mismo se ha realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia del TCO más reciente —años 1988 a 1990, ambos inclusive—, sin olvidar la cita obligada, por su relevancia, de algunas Sentencias del mismo anteriores. A mayor abundamiento véase en el anexo la jurisprudencia consultada.

⁷ VALDES DE LA VEGA, B.: “Variación jurisprudencial en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en *REDT*, n.º 30, Cívitas, 1987, pág. 299.

■ II. PRESUPUESTOS QUE HAN DE CONCURRIR PARA ENTENDER VULNERADO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY

La igualdad en la aplicación de la ley no constituye, sin más, una obligación de trato igual de los iguales; como ya se ha adelantado, su verdadero alcance ha de ponerse en relación con los requisitos de operatividad de aquélla exigidos por la justicia constitucional.

Y así entiende nuestro TCO que han de concurrir dos presupuestos para que pueda apreciarse la vulneración del PIAL, a saber:

*“En primer lugar, es preciso que exista y se aporte un término de comparación adecuado, requisito que sólo concurre cuando se compara la resolución judicial impugnada con otra u otras anteriores del mismo órgano judicial que se hayan ocupado de supuestos sustancialmente idénticos. En segundo lugar, es preciso también que entre ambas resoluciones se advierta con el consiguiente reflejo en el fallo judicial, un cambio de criterio inmotivado, arbitrario o carente de la necesaria fundamentación jurídica, esto es, que se modifique radicalmente el sentido de otras decisiones sin hacer referencia, ni siquiera de forma tácita, al criterio sostenido en anteriores ocasiones y a la razón en que pudiera estar fundada dicha modificación”*⁸.

1. Que exista y se aporte un término de comparación adecuado

Pero, ¿qué entiende nuestro TCO por “término de comparación adecuado”?

El TCO afirma que este presupuesto “sólo concurre cuando se compara la resolución judicial impugnada con otra u otras anteriores del mismo órgano judicial que se hayan ocupado de supuestos sustancialmente idénticos”⁹.

Por tanto, tres son los elementos que configuran el término de comparación adecuado, los cuales deben ser acreditados por el recurrente en amparo; deben existir y deben ser alegados:

- Que se ofrezca como término de comparación una o varias resoluciones que sean temporalmente anteriores.
- Que se trate de resoluciones del mismo órgano judicial.
- Que se trate de resoluciones cuyos supuestos de hecho sean sustancialmente iguales.

1.1. Que se ofrezca como término de comparación una o varias resoluciones que sean temporalmente anteriores

Este requisito, en su configuración actual, es novedoso. En efecto, hasta la Sentencia del TCO 35/1988, de 2 de marzo, el TCO venía exigiendo la aportación de varias resoluciones judiciales. A partir de esta resolución —y en el mismo sentido la Sentencia del TCO 55/1988, de 24 de marzo—, el TCO, al reconocer al trabajador recurrente el derecho a ser restituido en la igualdad en la aplicación de la ley, pese a que sólo aportó una Sentencia como término de comparación, admitía implícitamente esta posibilidad.

⁸ STCO 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º El subrayado es mío.

⁹ STCO 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º El subrayado es mío. En el mismo sentido, SSTCO 27/1988, de 23 de febrero, FJ 3.º; 35/1988, de 3 de marzo, FJ 2.º; 55/1988, de 24 de marzo, FJ 3.º; 65/1988, de 13 de abril, FJ 4.º; 73/1988, de 21 de abril, FJ 3.º; 132/1988, de 4 de julio, FJ 3.º; 48/1991, de 28 de febrero, FJ 4.º

Esto mismo lo recoge, pero ya explícitamente, la Sentencia del TCO 63/1988, de 11 de abril, cuando afirma que es necesario que el demandante de amparo “aporte un término de comparación adecuado, requisito que sólo concurre cuando se compara la resolución judicial impugnada *con otra u otras* anteriores del mismo órgano judicial que se hayan ocupado de supuestos sustancialmente idénticos”¹⁰. En el mismo sentido, la Sentencia del TCO 108/1988, de 8 de junio, manifiesta que es necesario que “el demandante de amparo ofrezca *una o algunas resoluciones* anteriores, dictadas en casos idénticos por el mismo órgano judicial, *que sirva o sirvan de término de comparación*, a fin de constatar si ha existido o no trato diferenciado”¹¹. Y ello porque, como muy bien dice nuestro TCO en su Sentencia 144/1988, de 12 de julio, “el cambio de criterio y su fundamentación puede deducirse de la propia decisión judicial”¹², pasando ésta a constituir por sí misma doctrina legal y sirviendo como único término de comparación para eventuales infracciones del PIAL.

A mi juicio, este criterio, que se aparta de la exigencia ya tradicional en nuestra jurisprudencia de un mínimo de dos resoluciones para intentar hacer valer los precedentes, supone un correcto tratamiento del principio de igualdad que está en juego. En efecto, cuando un órgano judicial concreto conoce algún asunto y lo falla en un determinado sentido, entiendo que ese mismo órgano judicial debe estar dispuesto a resolver de igual forma cualquier controversia posterior de idénticas características, porque de lo contrario quebraría la confianza del justiciable en recibir una misma respuesta ante una misma pretensión; por tanto, aquella resolución, si no se quiere atentar contra los principios de igualdad y de seguridad jurídica, debe entenderse como solución genérica extrapolable a las controversias posteriores de iguales características. Y ello es independiente de que sea la única resolución en ese sentido o ya existan varias al respecto. No es una cuestión de cantidad. Se trata de una mera exigencia de racionalidad y de coherencia en el actuar jurisdiccional en virtud de la cual, a los supuestos de hecho iguales deben serles aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también¹³. *Y para proceder a un trato desigual —y esto será objeto de estudio en el segundo presupuesto del PIAL— hay que justificarlo.*

Por lo que se refiere a la temporalidad de las resoluciones aportadas como término de comparación, el TCO viene exigiendo que éstas sean anteriores a aquélla que se considera que infringe el PIAL; requisito obvio en cuanto que el cambio de criterio que introduce la resolución impugnada siempre lo será respecto de una o varias Sentencias temporalmente anteriores, las cuales deberán necesariamente traerse a colación para poder realizar el juicio de igualdad.

Así, la Sentencia del TCO 55/1988, de 24 de marzo, pone de manifiesto que “en la aplicación jurisdiccional de la ley puede existir vulneración del mencionado principio cuando un mismo órgano judicial *se aparte de sus resoluciones precedentes* sin ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”¹⁴. En el mismo sentido, la Sentencia del TCO 63/1988, de 11 de abril, afirma que el término de comparación adecuado “sólo concurre cuando se compara la resolución judicial impugnada *con otra u otras anteriores* del mismo órgano judicial que se hayan ocupado de supuestos sustancialmente idénticos”¹⁵. Y, en la Sentencia del TCO 108/1988, de 8 de junio, el TCO dirá que “un mismo juez

¹⁰ STCO 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º El subrayado es mío.

¹¹ STCO 108/1988, de 8 de junio, FJ 2.º El subrayado es mío.

¹² STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 2.º En el mismo sentido, la STCO 63/1984, de 21 de mayo, FJ 5.º, y la STCO 64/1984, de 21 de mayo, FJ 3.º

¹³ En este sentido, DESDENTADO BONETE, A.: “Igualdad en la aplicación de la ley y límite máximo de la base reguladora de las pensiones en el extinguido régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores ferroviarios. (Un comentario a la Sentencia 82/1990, de 4 de mayo, del Tribunal Constitucional)”, en REDT, n.º 48, Cívitas, 1991, pág. 633, para quien “en realidad, es indiferente que el término de comparación sea un precedente aislado o una doctrina consolidada”.

¹⁴ STCO 55/1988, de 24 de marzo, FJ 1.º El subrayado es mío.

¹⁵ STCO 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º El subrayado es mío.

o Tribunal no puede modificar *el sentido de las decisiones adoptadas con anterioridad* en casos sustancialmente idénticos a no ser que se aparte conscientemente de él, ofreciendo una fundamentación suficiente y razonable”¹⁶.

Pero en la última resolución citada el TCO introduce un elemento novedoso, ya que se sirve también de una Sentencia posterior en el tiempo para fundamentar su fallo. En efecto, en el supuesto de la Sentencia 108/1988, de 8 de junio, se somete a la apreciación del TCO la Sentencia de la Sala segunda del Tribunal Central de Trabajo (en adelante, TCT), de 7 de enero de 1987, por posible infracción del PIAL, tomándose como referencia la dictada por la misma Sala del TCT, de 10 de diciembre de 1986 (que, como puede observarse, es anterior a aquella que se considera que vulnera el PIAL). En este caso, el TCO consideró que la Sentencia de 7 de enero de 1987, se apartaba injustificadamente de la Sentencia de 10 de diciembre de 1986, en base a las dos siguientes razones: una, porque el cambio de criterio que supuso la Sentencia de 7 de enero de 1987, respecto de la Sentencia de 10 de diciembre de 1986, no se motivó, ni expresa ni tácitamente; dos, por la existencia de una resolución posterior a aquella que se considera que infringe el PIAL —la Sentencia de la misma Sala del TCT, de 4 de marzo de 1987— en la cual se conoció de un caso idéntico y se resolvió en el mismo sentido que en la Resolución de 10 de diciembre de 1986. Con estos dos argumentos, el primero reforzado por el segundo, el TCO constató que el cambio de criterio que supuso la Sentencia de 7 de enero de 1987 era inmotivado o arbitrario.

Pero la resolución más decisiva en este mismo sentido la constituye la Sentencia 144/1988, de 12 de julio, en la que se admite expresamente la aportación de resoluciones posteriores en el tiempo como término de comparación válido. Así, dirá que el recurso de amparo únicamente puede prosperar “cuando quien se sienta víctima de una aplicación discriminatoria de la ley pueda ofrecer razones que le autoricen a pensar que la divergencia interpretativa es simplemente la cobertura formal de una decisión, *cuyo sentido diverso al de otras decisiones anteriores y eventualmente posteriores*, se debe realmente al hecho de que se han tomado en consideración circunstancias personales o sociales de las partes, incluso simplemente su propia identidad, que no debieron serlo”¹⁷.

Pese a que esta nueva línea interpretativa abierta por el TCO en las últimas resoluciones citadas carece de un refrendo posterior¹⁸, y siendo conscientes de la necesidad de aportar al menos una resolución anterior —obviedad que no merece más comentario—, considero que las resoluciones posteriores pueden servir, especialmente en los casos difíciles, de refuerzo argumentativo importante en manos del demandante de amparo.

En efecto, imaginemos que un particular considera que una resolución judicial (a la que llamaremos B) infringe su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por apartarse injustificadamente de otra anterior (a la que llamaremos A) del mismo órgano judicial y respecto de un supuesto idéntico. Lo que el TCO tendrá que comprobar (constatado ya, previamente, que estamos ante el mismo órgano judicial y ante un supuesto sustancialmente igual) es si el cambio de criterio que supone la resolución B está justificado —con lo cual, la nueva decisión pasaría a ser la nueva doctrina

¹⁶ STCO 108/1988, de 8 de junio, FFJJ 2.º y 3.º El subrayado es mío.

¹⁷ STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 3.º El subrayado es mío.

¹⁸ De las pocas Sentencias del TCO que con posterioridad aluden al tema, ninguna de ellas hace referencia a los pronunciamientos posteriores como término de comparación adecuado. Así, unas —STCO 68/1989, de 19 de abril, FJ 1.º; STCO 162/1989, de 16 de octubre, FJ 4.º— aluden a la necesidad de aportar *resoluciones simplemente*, sin hacer referencia a la temporalidad de las mismas —anteriores o posteriores—, con lo cual nos queda la duda de si se admiten o no; y, otras —STCO 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º; STCO 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º— vuelven a su criterio original, haciendo referencia exclusiva a la aportación de *resoluciones anteriores* a la resolución impugnada: ¿significa esto que los pronunciamientos posteriores dejan de tener relevancia para el juicio de igualdad?

del Tribunal en la materia¹⁹— o si, por el contrario, carece de fundamentación —en cuyo caso, se habría infringido realmente el PIAL—.

Pero si el justiciable sabe de la existencia de posteriores resoluciones (C, D y E) coincidentes con la solución primera (A), aquéllas le pueden servir para reforzar la tesis de que la solución B se adoptó de una manera inconsciente e irrazonada y que, por tanto, infringió el PIAL.

Desde esta perspectiva, las resoluciones posteriores pueden ser muy útiles en aquellos casos en que no quede claro si el cambio de criterio operado por la resolución impugnada está o no suficientemente justificado en sí mismo. Entonces, los posteriores pronunciamientos de un mismo órgano judicial en casos iguales, coincidentes con lo que venía siendo su doctrina anterior a dicha decisión, permitirían constatar que aquel cambio es realmente arbitrario, no sólo por no aparecer claramente motivado, ni expresa ni tácitamente, sino también por carecer de un reffrendo posterior²⁰.

No obstante, hay que relativizar la cuestión en cuanto que no siendo necesaria la aportación de eventuales resoluciones posteriores —y ello porque las resoluciones anteriores son suficientes e ineludibles—, cuando no quede patente si el cambio de criterio operado por la decisión impugnada está o no suficientemente justificado habrá que entender que no lo está y que, por tanto, se trata de un cambio de criterio arbitrario o carente de la necesaria fundamentación jurídica que, como luego se verá, infringe el PIAL.

1.2. *Que se trate de resoluciones del mismo órgano judicial*

Tanto la resolución impugnada (aquella que se considera que infringe el PIAL) como aquella o aquellas que se ofrecen u ofrecen como término de comparación deben provenir del mismo órgano judicial.

Es bien sabido que la Organización Judicial Ordinaria española está integrada por los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo y social, cada uno de ellos con cometidos en las distintas materias que representan. A su vez, los distintos organismos jurisdiccionales pueden ser Juzgados o Tribunales según la composición unipersonal o colegiada de sus miembros, respectivamente. Los órganos colegiados actúan sus funciones judiciales por medio de Salas y Secciones, precediéndose así al reparto de asuntos.

¿Ante esta variedad de órganos judiciales, qué entiende el TCO por “mismo órgano judicial”? ¿Acaso un Juzgado de lo social ha de fallar de forma igual que el Tribunal Superior de Justicia en su Sala de lo civil? Lógicamente no, pues son órganos judiciales con cometidos distintos, por lo que no están en condiciones de conocer supuestos iguales. ¿Son entonces los distintos Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional —en nuestro caso, orden jurisdiccional social o laboral— quienes deben resolver igual los supuestos sustancialmente iguales?; ¿deberán fallar los Juzgados de lo social igual que la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, y éste igual que el Tribunal Supremo en su Sala de lo social?; ¿acaso los distintos Juzgados de lo social entre sí? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta afirmativa, ya que nuestro TCO entiende el mismo órgano judicial en sus estrictos términos: vayamos a cualquier órgano judicial de la geografía española, entremos en su sede,

¹⁹ Esto es así porque, como ya he puesto de manifiesto, y por las razones señaladas, en opinión del TCO “el cambio de criterio y su fundamentación puede deducirse de la propia decisión judicial” (STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 2.º). En el mismo sentido, la STCO 63/1984, de 21 de mayo, FJ 5.º, y la STCO 64/1984, de 21 de mayo, FJ 3.º

²⁰ Esta interpretación, como en su momento se verá, se coherencia con la doctrina del TCO de los llamados “elementos de juicio externo”, siendo una consecuencia lógica de la admisibilidad de éstos.

pasemos a alguna de sus Salas o Secciones²¹ y en ella estaremos ante el órgano judicial concreto que está obligado a contemplar igualmente los supuestos sustancialmente iguales sometidos a su conocimiento. Mismo órgano judicial es el Juzgado de lo social número 2 de los de Alicante, la Sala cuarta de lo social del Tribunal Supremo y también la Sala cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por poner algún ejemplo, cada una respecto de los asuntos que conozca, respectivamente.

Y ello, porque el TCO entiende que “ni el principio de igualdad, ni su configuración como derecho subjetivo, permiten asegurar un tratamiento idéntico, uniforme o unificado por los diversos órganos judiciales”²².

La exigencia, como presupuesto para poder realizar el juicio de igualdad, de que se trate de un mismo órgano judicial, en los términos descritos, obedece, en opinión del TCO, a la necesidad de garantizar el principio de independencia y autonomía de jueces y Tribunales en la interpretación y aplicación de la ley, consagrado en el artículo 117 CE y desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), con el cual se pretende que los órganos judiciales no se vean interferidos en el ejercicio de sus funciones (la interpretación y la aplicación de la ley) por otros poderes del Estado —el legislativo y el ejecutivo—, ni siquiera por el propio Poder Judicial. En este último sentido —que es el que interesa— el artículo 13 LOPJ dice que los jueces y Tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, son independientes con respecto a todos los órganos judiciales.

Y así, entiende el TCO que cuando la aplicación de la ley corresponde a órganos judiciales diversos “la institución que realiza el principio de igualdad y a través de la que se busca la uniformidad es la jurisprudencia, encomendada a órganos jurisdiccionales de superior rango, porque el principio de igualdad en la aplicación de la ley tiene necesariamente que cohonestarse con el principio de independencia de los órganos encargados de la aplicación de la ley cuando éstos son órganos jurisdiccionales”²³.

En este mismo sentido, la más reciente Sentencia del TCO 144/1988, de 12 de julio, afirma: “que la homogeneidad en la interpretación y aplicación de la ley sea un objetivo a alcanzar en un Estado de Derecho (art. 1.1 CE) e incluso una finalidad que el legislador debe perseguir para dar realidad al principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 CE es, naturalmente, cosa fuera de duda. Pero la consecución del objetivo, la obtención de la finalidad han de conseguirse sin mengua de la independencia judicial, que es también un componente esencial de la noción de Estado de Derecho y un principio estructural consagrado por nuestra Constitución (art. 117). Por eso el juez no está sujeto a instrucciones de los Tribunales Superiores o del Tribunal Supremo, que sólo a través de los recursos previstos en las leyes procesales pueden corregir, en su caso, la interpretación de las leyes que juzguen, también con libertad, incorrectas”²⁴. En este mismo sentido, otras anteriores²⁵ y posteriores²⁶ que se ocupan de la materia.

Pero no conviene olvidar, como sí hace el TCO en esta su Sentencia (144/1988), que la tan deseable uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de órganos plurales,

²¹ Sobre la consideración de las Secciones como organismos jurisdiccionales propios a los efectos del juicio constitucional de igualdad, véase *infra*.

²² STCO 200/1990, de 10 de diciembre, FJ 2.º En el mismo sentido, las SSTCO 65/1988, de 13 de abril, FJ 4.º; 73/1988, de 21 de abril, FJ 3.º; 117/1988, de 20 de junio, FJ 4.º; 130/1988, de 4 de julio, FJ 3.º; 132/1988, de 4 de julio, FJ 3.º; 134/1988, de 4 de julio, FJ 3.º; 190/1988, de 17 de octubre, FJ 3.º; 161/1989, de 16 de octubre, FJ 2.º; 1/1990, de 15 de enero, FJ 3.º; 5/1991, de 14 de enero, FJ 3.º

²³ STCO 49/1982, de 14 de julio, FJ 2.º Cita de RODRIGUEZ-PIÑERO, M. y FERNANDEZ LOPEZ, M. F.: “Igualdad y discriminación”, *ob. cit.*, pág. 24. En idéntico sentido, la STCO 52/1982, de 22 de julio, FJ 5.º

²⁴ STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 3.º

²⁵ SSTCO 27/1988, de 23 de febrero, FJ 2.º; 54/1988, de 24 de marzo, FJ 2.º

²⁶ SSTCO 190/1988, de 17 de octubre, FJ 3.º; 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º

brindaría unas mayores garantías no sólo al principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE, sino también, y lo que es más importante, al principio de igualdad del artículo 14 CE, al que la resolución anteriormente citada (49/1982), también del TCO, alude sin temor.

Y esto es así porque el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley entendido, sin los recortes efectuados por el TCO, como el derecho a obtener un trato igual para los supuestos sustancialmente iguales, queda vulnerado de la misma manera cuando las divergencias en la aplicación de la ley provienen de un mismo órgano judicial que cuando proceden de órganos diversos. Pues bien, si se está de acuerdo con este razonamiento, del mismo se infiere que con la configuración tan estricta que el TCO hace del PIAL no se garantiza plenamente el derecho a un trato igual de los iguales; tan sólo se evitan los tratos discriminatorios del mismo órgano judicial y no así los provenientes de órganos judiciales distintos, los cuales quedan fuera del juicio constitucional de igualdad²⁷.

Para concluir con este punto, y tratando de cerrar un poco más el círculo, vamos a plantear el siguiente problema: si, como se ha afirmado, los Tribunales son órganos colegiados y, por tanto, integrados por varios miembros, ¿estamos ante un mismo órgano judicial independientemente de su composición o, por el contrario, aquél cambia cuando por cualquier causa sus miembros lo hacen también? Si se repara, es una cuestión de gran trascendencia, pues, como la práctica demuestra, el funcionamiento de nuestros Tribunales a través de suplentes, por las más variadas razones, es harto frecuente, por lo que si respondemos en el segundo sentido rara vez nos encontraremos ante el mismo órgano judicial, con todas las consecuencias de ineficacia de la igualdad en la aplicación de la ley que ello trae consigo. Y esta cuestión se plantea en idénticos términos para el caso de cambio de titularidad en los órganos unipersonales.

La respuesta nos la da el TCO en su Sentencia 161/1989, de 16 de octubre, según la cual “la cuestión no es tan simple como a primera vista pudiera pensarse, pues si bien las Sentencias a considerar, tanto la impugnada como las ofrecidas como término de comparación, proceden todas ellas de la misma Sala cuarta del Tribunal Central de Trabajo, no son, sin embargo, los mismos los Magistrados que en cada caso la componen y no sería, en consecuencia, imposible, que las diferencias de interpretación se hubieran originado no en un cambio de criterio, sino simplemente en los cambios en la composición personal de la Sala, manteniendo los distintos Magistrados incambiado su propio criterio. Si la independencia judicial hubiese de ser entendida como independencia de criterio personal de cada juez, de cada integrante del Poder Judicial, sería forzoso concluir que nos encontrábamos ante órganos judiciales distintos. Como ya dijimos en nuestro Auto 862/1986, la reducción de las exigencias derivadas del PIAL a una simple coherencia personal de cada juez consigo mismo llevaría a vaciar totalmente de contenido el mencionado principio constitucional que, cuando menos, obliga a considerar que el órgano judicial es siempre el mismo, definido por su denominación orgánica, aunque cambie su titularidad en el caso de órganos unipersonales, o la composición del Colegio decisorio en los colegiados, bien sea en este último caso porque éste actúa dividido en Secciones con

²⁷ Parece ser que, en principio, cabe plantear una cuestión de igualdad en la aplicación de la ley referida a órganos judiciales diversos a través de las vías procesales oportunas: la unificación de la jurisprudencia por los Tribunales de superior rango (véase el extracto de la STCO 49/1982, de 14 de julio, antes transcrito). En el mismo sentido interpreta esta Sentencia SUAY RINCON, J.: “La igualdad en la aplicación de la ley. La doctrina del Tribunal Constitucional”, en *Poder Judicial*, n.º 4, 1986, págs. 103-104. Si bien, dicho autor, considera que “la praxis posterior ha venido a demostrar la evanescencia de esta doctrina”. De hecho, y como puede constatar en la STCO 144/1988, de 12 de julio, la uniformidad en la aplicación de la ley por parte de órganos judiciales diversos es considerada más una cuestión de seguridad jurídica que un problema de igualdad. Un decisivo papel en aras de la consecución de la igualdad aplicativa en el orden social de la jurisdicción puede jugar el nuevo recurso de casación para la unificación de doctrina, el cual viene llamado desde la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, en su apartado III, a “asegurar la unificación de la jurisprudencia que el respeto a los principios de unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de la ley exigen”. Del desarrollo que del mismo haga la jurisprudencia del Tribunal Supremo dependerá que se consolide o no esta posibilidad que, por el momento, divide a la doctrina científica.

arreglo a un turno establecido para la distribución o reparto de asuntos, bien sea porque, aun sin tal formalización de la división interna del trabajo, ésta se opera mediante una rotación periódica en la composición de la Sala. Las reglas o prácticas seguidas para la distribución de asuntos no alteran la competencia del órgano, que es el criterio decisivo para resolver sobre la existencia de unidad o pluralidad de órganos decisores”²⁸.

Por lo tanto, nuestro TCO entiende que ni el cambio de titularidad en los órganos unipersonales, ni el de la composición personal en los colegiados —como el que se opera, por ejemplo, con las distintas Secciones de un Tribunal—, alteran la consideración del órgano que ha de entenderse, en todo caso, el mismo. De esta forma se aleja de una consideración de la independencia judicial entendida como la autonomía de criterio personal de cada juez, posibilidad que es rechazada, a mi juicio con buen criterio, in pro de la salvaguarda del principio de igualdad.

No obstante, hay una resolución posterior —la Sentencia del TCO 134/1991, de 17 de junio— en parte contradictoria con aquella, al entender que “las dos Secciones de la Audiencia Provincial de que provienen las Sentencias contradictorias constituyen órganos jurisdiccionales diferentes”²⁹. Esta afirmación choca con el Auto del TCO 862/1986, citado por la Sentencia antes referida (161/1989), para el cual “entender que Secciones distintas de la misma Audiencia Provincial son Tribunales distintos, equivale a entender que el órgano cambia cuando cambia su titular”; contradiciendo asimismo la Sentencia en que se recoge dicho Auto cuando afirma, ahora ya con carácter general y no sólo circunscrito a las Audiencias Provinciales, que el reparto de asuntos que se opera con las Secciones no las convierte en organismos jurisdiccionales propios a los efectos del juicio de igualdad³⁰.

Se produce así un cambio de criterio en la calificación de las distintas Secciones que, de acuerdo con la LOPJ, pueden integrar cada Sala de un Tribunal o Audiencia —antes mismo órgano judicial, ahora organismos jurisdiccionales distintos—, si bien se trata de un cambio de criterio consciente y razonado. En efecto, con cita expresa de su anterior doctrina contenida en el Auto 862/1986 (se omite cualquier referencia a la más reciente Sentencia 161/1989) nuestro TCO justifica la nueva decisión en base a que “no sólo con anterioridad a la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, sino con mucha mayor claridad después de ésta, las Secciones de las Audiencias Provinciales no constituyen mera formación ocasional del Tribunal, sino Tribunales orgánica y funcionalmente diferentes dentro de la Audiencia”³¹. Y avala esta afirmación con la cita de determinados preceptos de dicha Ley³².

De todas formas se puede seguir concluyendo, de conformidad con la Sentencia del TCO 161/1989 —ya se ha dicho que la contradicción es sólo parcial—, que los cambios ocasionales en la composición de los órganos colegiados no alteran su consideración como mismo órgano judicial. Y ello porque esta afirmación no es contradicha por la Sentencia del TCO 134/1991. Es más, repárese que la nueva configuración que de las Secciones hace esta resolución —organismos jurisdiccionales propios— descansa en el entendimiento de que las mismas no constituyen composiciones personales variables dependientes de las necesidades de la Sala, sino Tribunales orgánica y funcionalmente diferentes.

²⁸ STCO 161/1989, de 16 de octubre, FJ 2.º

²⁹ STCO 134/1991, de 17 de junio, FJ 2.º

³⁰ En este sentido, véase el extracto de la STCO 161/1989, de 16 de octubre, antes transcrito.

³¹ STCO 134/1991, de 17 de junio, FJ 2.º

³² A saber, los artículos 81.1, 80.2, 331.1, 208.1 y 2, 209, 152.1, 1.º y 2.º, 160, 196 y 197, todos ellos de la LOPJ. Dado que estos preceptos no sólo se refieren a la organización y funcionamiento de las Secciones de las Audiencias Provinciales, sino también a las del resto de los órganos colegiados (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia), a todas ellas hay que extender la misma conclusión. Por tanto, no sólo las Secciones de las Audiencias Provinciales constituyen organismos jurisdiccionales propios, sino también cualquier Sección de cualquier órgano colegiado.

1.3. *Que se trate de resoluciones cuyos supuestos de hecho sean sustancialmente iguales*

Es decir, que las resoluciones que se comparan presenten elementos fácticos comunes suficientes como para considerarlos jurídicamente iguales, a los efectos que interesan.

Es un requisito lógico, pues solamente se puede exigir a un órgano judicial que falle igual aquellos supuestos que realmente sean iguales, ya que de no existir identidad de circunstancias en los supuestos de hecho contenidos en las resoluciones judiciales que se comparan, no es posible alegar diferencia de trato ni, por tanto, discriminación³³.

La igualdad, en algunos casos, llegará a ser identidad; en otros, por el contrario, aquélla no será tan evidente³⁴.

Baste señalar de este requisito dos cosas más:

En primer lugar, que ha de ser el recurrente de amparo quien aporte el término de comparación adecuado y, por tanto, quien tiene la carga de probar que las situaciones son esencialmente similares: “es indispensable que quien alega la infracción del artículo 14 de la Constitución aporte un término de comparación válido, demostrando así la identidad sustancial de las situaciones jurídicas que han recibido diferente trato”³⁵.

En segundo lugar, que corresponde al TCO determinar el grado de similitud de los supuestos aportados. De que el TCO aprecie o no una identidad sustancial de los mismos dependerá que prospere o no el recurso de amparo por supuesta infracción del PIAL. No obstante ello, para realizar este juicio de igualdad el TCO no tiene facultades omnímodas, sino que encuentra su límite en el artículo 44.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTCO), en virtud del cual, el TCO comparará los supuestos de hecho contenidos en las resoluciones aportadas con sujeción absoluta a los hechos declarados probados en esas mismas resoluciones por los Tribunales ordinarios³⁶. Teniendo en cuenta esta cortapisa —la cual reconduce todo el problema a la averiguación por el TCO y consiguiente prueba por el recurrente de amparo, de la igualdad jurídica de supuestos, y no de su igualdad fáctica— el TCO posee facultades valorativas, pudiéndose servir para esta labor de las alegaciones que al respecto hagan los recurrentes en amparo —demandante y demandado³⁷—, y de las propias del Ministerio Fiscal³⁸ —el cual, con arreglo al artículo 47.2 LOTCO, intervendrá en todos estos procesos—.

³³ Por todas, SSTCO 90/1989, de 11 de mayo, FFJJ 4.º y 9.º; 162/1989, de 16 de octubre, FJ 3.º; 180/1989, de 3 de noviembre, FJ 1.º; 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º; 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º; 5/1991, de 14 de enero, FJ 3.º

³⁴ Sobre las nociones de identidad y de igualdad, véase PEREZ LUÑO, A. E.: “Sobre la igualdad...”, *ob. cit.*, pág. 134: la identidad se da “cuando dos o más objetos tienen en común todos sus elementos o características sin que exista ninguna particular que los distinga”; la igualdad, por contra, “supone una identidad parcial”.

³⁵ STCO 162/1989, de 16 de octubre, FJ 3.º En el mismo sentido, las SSTCO 27/1988, de 23 de febrero, FFJJ 3.º y 4.º; 35/1988, de 3 de marzo, FJ 2.º; 55/1988, de 24 de marzo, FJ 3.º; 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º; 73/1988, de 21 de abril, FJ 3.º; 122/1988, de 22 de junio, FJ 4.º; 132/1988, de 4 de julio, FJ 3.º; 68/1989, de 19 de abril, FJ 1.º En su momento se verá cómo, paralelamente, corresponde al órgano judicial que introduce la diferencia de trato la carga de la justificación de la misma, procediéndose de esta forma al reparto de las cargas argumentativas.

³⁶ En este sentido, STCO 55/1988, de 24 de marzo, FJ 2.º, y STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 1.º; 5/1991, de 14 de enero, FJ 4.º

³⁷ Como ocurre en la STCO 68/1988, de 19 de abril, FJ 1.º

³⁸ Como ocurre en la STCO 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º

2. Que se trate de un cambio de criterio inmotivado o arbitrario

Parece conveniente, antes de pasar al análisis pormenorizado de este presupuesto, describir sucintamente la noción de arbitrariedad en relación con la idea de igualdad; es decir, la igualdad entendida como prohibición de la arbitrariedad.

Es generalmente admitido, en la doctrina y en la jurisprudencia, que el principio de igualdad no impone una prohibición absoluta de establecer diferencias de tratamiento por parte de los Tribunales, sino tan sólo una prohibición relativa: la de aquellas distinciones que sean arbitrarias por carecer de un fundamento suficiente. Por tanto, lo que el principio de igualdad prohíbe son aquellos tratamientos desiguales que sean arbitrarios, bien por una ausencia de motivación de los mismos (arbitrariedad por inmotivación), bien en base a una motivación irrazonable.

Entendida la noción de arbitrariedad en esa doble vertiente, sucede que, si bien todo cambio de criterio inmotivado implica que éste a su vez es arbitrario, lo contrario ya no es enteramente cierto, pues no todo cambio de criterio arbitrario lo es por inmotivación del mismo; también puede serlo por una mala o insuficiente motivación. A partir de ahora, y para no inducir a confusión, utilizaré el término *inmotivación* entendido como la ausencia de razones para el trato desigual, y reservaré la noción de *arbitrariedad* para referirme exclusivamente a la insuficiencia de las razones aportadas.

Pues bien, la presencia de un “cambio de criterio inmotivado o arbitrario” constituye el segundo presupuesto exigido por nuestro TCO para poder constatar la vulneración del PIAL.

“Cambio de criterio inmotivado o arbitrario” —en opinión del TCO— es aquél por el cual un órgano judicial “modifica radicalmente el sentido de otras decisiones sin hacer referencia, ni siquiera de forma tácita o implícita, al criterio sostenido en anteriores ocasiones y a la razón en que pudiera estar fundada dicha modificación”³⁹.

Por tanto, y parafraseando al TCO, sucede que, por un lado, cuando un órgano judicial cambia de criterio sin dar razones para ello (siempre que se dé asimismo el primer presupuesto antes estudiado), está infringiendo el PIAL; y, por otro, que un órgano judicial puede modificar su anterior criterio válidamente, es decir, sin infringir el PIAL, siempre que dé razones a esa variación, siquiera de forma tácita.

Pues bien, de estas palabras del TCO se infiere alguna de las dos siguientes conclusiones: Primera, que pese a la intitulación de este extracto de Sentencia (“cambio de criterio inmotivado o arbitrario”), el TCO solamente define el cambio de criterio inmotivado, o, segunda, que el TCO confunde la inmotivación con la arbitrariedad, siendo cosas distintas como me he encargado de explicar.

Para resolver este dilema habrá de dilucidarse qué son *razones* para nuestro TCO.

Lo que parece claro es que si un órgano judicial cambia de criterio sin dar razones para ello, infringe el PIAL. Pero supongamos que sí las da: ¿acaso *cualquier razón*, por burda que ésta sea, determina en todo caso que el cambio de criterio operado sea válido o, por el contrario, la licitud del cambio requiere que las razones aducidas tengan *cierto peso o entidad*?

Si respondemos en el primer sentido, bastará con que el TCO constate que el órgano judicial en cuestión dio cualquier argumento al modificar su anterior criterio, para que aprecie sin más la no infracción del PIAL. Esta parece ser la postura del TCO en su Sentencia 63/1984, de 21 de mayo —al decir que “es preciso compatibilizar el principio de igualdad con la autonomía de los órganos judiciales en el ejercicio de su exclusiva competencia de juzgar y ejecutar lo juzgado (art. 117, n.º 3, de la CE) que impide que este TC pueda entrar a valorar la causa justificadora del cambio de criterio judicial. No compete, pues, a este TC analizar la suficiencia de las razones jurídicas motivadoras del cambio de criterio, pues, además de versar ello sobre la propia legalidad, carecería de sentido un enjuiciamiento que habría de

³⁹ STCO 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º El subrayado es mío.

respetar por definición los elementos de derecho conducentes a la nueva interpretación, so pena de asentar los pronunciamientos de los Tribunales sobre un principio de predominio de los precedentes que no es consustancial con nuestro sistema jurídico”⁴⁰—, y la que parece desprenderse de su Sentencia 63/1988, de 11 de abril, antes citada. Sin embargo, esta opción, como luego se verá, puede vaciar totalmente de contenido el PIAL, al operar una reducción de la noción de arbitrariedad, entendida exclusivamente como la ausencia de razones para el trato desigual; la arbitrariedad como inmotivación.

Por ello me parece más adecuada la segunda opción, la cual permite al TCO valorar si las razones alegadas tienen o no suficiente entidad como para justificar el cambio. Por otra parte, ésta parece ser la postura de la jurisprudencia del TCO más reciente⁴¹, y la que penetra en la noción de arbitrariedad entendida en su doble vertiente antes señalada.

Porque, de lo contrario, ¿qué sentido tienen las siguientes manifestaciones del TCO?

— “Lo prohibido por el artículo 14 CE es que los jueces y Tribunales modifiquen esencialmente sus propias decisiones de supuestos idénticos *sin motivación razonada y razonable* del cambio de criterio”⁴².

— “Un mismo juez o Tribunal no puede modificar el sentido de las decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente idénticos a no ser que se aparte conscientemente de él, ofreciendo una *fundamentación suficiente y razonable* que motive el cambio de criterio o, en ausencia de tal motivación expresa, resulte patente que la diferencia de trato tiene su fundamento en un efectivo cambio de criterio por desprenderse así de la propia resolución impugnada o por existir otros elementos de juicio externo que así lo indiquen”⁴³.

— “La apreciación de una vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley exige constatar si la diferencia de trato tiene o no una *fundamentación objetiva y razonable*”⁴⁴.

— “Si se introducen elementos de diferenciación para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables, y no constituir una excusa o pretexto para producir un tratamiento discriminatorio (...). *Tal resolución ofrece expresamente la justificación para la diferencia de trato, y tal justificación no puede considerarse irrazonable*”⁴⁵.

— “En el presente caso, sin duda, el nuevo criterio está argumentado en términos generales, e incluso se dan las razones que abonan el cambio, *pero éste resulta arbitrario y, en consecuencia, discriminatorio porque tales razones se ofrecen en abstracto, y no resultan aplicables al caso a resolver*”⁴⁶.

— “*Es a este Tribunal a quien corresponde en su función de amparo de las garantías y derechos fundamentales, determinar si se da o no esa justificación de la decisión singular que se aparta de otra u otras*

⁴⁰ STCO 63/1984, de 21 de mayo, FJ 4.º El subrayado es mío. Cita extraída de SUAY RINCON, J.: “La igualdad en la aplicación...”, *ob. cit.*, pág. 102. En idéntico sentido, la STCO 30/1987, de 11 de marzo, FJ 2.º: “se trata, en suma, no de examinar la suficiencia o insuficiencia del fundamento dado a la diversidad de trato, sino de determinar, tan sólo, si existe, para la diferente aplicación de la norma, ese fundamento”.

⁴¹ Así, entre otras, las SSTCO 35/1988, de 2 de marzo, FJ 4.º; 65/1988, de 13 de abril, FJ 4.º; 108/1988, de 8 de junio, FJ 2.º; 68/1989, de 19 de abril, FJ 1.º; 90/1989, de 11 de mayo, FFJJ 4.º y 9.º; 119/1989, de 3 de julio, FJ 4.º; 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º; 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º; 42/1991, de 25 de febrero, FJ 2.º; 128/1991, de 6 de junio, FJ 3.º, las cuales vienen a confirmar el criterio que el TCO ya mantenía en un primer momento: así, por todas, las SSTCO 49/1982, de 14 de julio, FJ 2.º; 52/1982, de 22 de julio, FJ 4.º; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4.º, citadas por SANCHEZ-URAN AZAÑA, Y.: “Sobre el principio de igualdad y la insuficiente motivación del cambio de línea jurisprudencial”, en *REDT*, n.º 34, Civitas, abril/junio 1988, pág. 302.

⁴² STCO 65/1988, de 13 de abril, FJ 4.º El subrayado es mío.

⁴³ STCO 108/1988, de 8 de junio, FJ 2.º El subrayado es mío.

⁴⁴ STCO 68/1989, de 19 de abril, FJ 1.º El subrayado es mío.

⁴⁵ STCO 90/1989, de 11 de mayo, FFJJ 4.º y 9.º El subrayado es mío.

⁴⁶ STCO 119/1989, de 3 de julio, FJ 4.º El subrayado es mío.

decisiones anteriores, y si queda o no excluido el reproche de voluntarismo selectivo que pudiera hacerse a la resolución última"⁴⁷.

— “Existiendo identidad en los hechos (...) y no apreciándose que el Tribunal haya fundado suficiente y razonablemente las razones de la modificación...”⁴⁸.

Y esta opción, a mi juicio, es la correcta (lógica y jurídicamente), porque de lo contrario, y como ya se apuntaba, el PIAL puede quedar sin funcionalidad práctica⁴⁹.

En efecto, si trascendemos el dato puramente conceptual —qué se entiende por mismo órgano judicial, cuándo estamos ante supuestos sustancialmente iguales, cuándo ante un cambio de doctrina válido...—, se observa que la configuración que el TCO hace de la igualdad en la aplicación de la ley obedece a la necesidad de compatibilizar dos realidades distintas, las cuales se corresponden, a su vez, con dos principios constitucionales:

— De una parte, la independencia y autonomía de jueces y Tribunales en la interpretación y aplicación de la ley, residenciada en el artículo 117.1 CE.

— De otra, la legítima confianza de todo ciudadano en obtener resoluciones judiciales idénticas para supuestos sustancialmente iguales, la cual se conecta con los principios de igualdad y de seguridad jurídica, principios ambos consagrados en la CE (arts. 14 y 9.3 respectivamente).

Y se observa, asimismo, que ante esta necesidad de coordinación el TCO impone sacrificios mutuos, de tal forma que:

— La independencia judicial no va a ser absoluta, y ello por la necesidad de garantizar la igualdad en la aplicación judicial de la ley: así, la independencia judicial no puede ir tan lejos que consienta la arbitrariedad, la cual está asimismo vedada para los poderes públicos por el artículo 9.3 CE⁵⁰.

— La igualdad en la aplicación de la ley se configura en términos muy estrictos, para no mermar la autonomía judicial: sólo el mismo órgano judicial —tal y como se ha descrito— está obligado a resolver igualmente los supuestos iguales sometidos a su apreciación. Y aun así, puede proceder a un trato desigual siempre que lo justifique⁵¹.

Pero, ¿qué sucedería si el TCO tuviera vedada la posibilidad de valorar la entidad de las razones justificadoras del cambio introducidas por el órgano judicial, limitándose tan sólo a constatar su existencia, y aquéllas, aun dándose, fueran subjetivas, insuficientes, no razonables...? Estaríamos ante la paradoja de un cambio de criterio arbitrario —y, por tanto, no garante de la igualdad ni de la seguridad jurídica y contrario a la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos— que no vulneraría el PIAL.

Concluyendo, si el objeto del PIAL es el de compatibilizar y coordinar los principios de igualdad y de seguridad jurídica con el de autonomía e independencia de los jueces y Tribunales, y si, por tanto, la finalidad última del PIAL consiste en evitar la arbitrariedad en el actuar jurisdiccional, esta

⁴⁷ STCO 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º El subrayado es mío.

⁴⁸ STCO 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º El subrayado es mío.

⁴⁹ Considero que esta opción no va contra el artículo 54 LOTCO; es más, pienso que la misma es absolutamente necesaria para la realización de aquél, es decir, para poder constatar si se ha infringido o no realmente el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

⁵⁰ Por todas, SSTCO 73/1988, de 21 de abril, FJ 3.º; 131/1988, de 4 de julio, FJ 2.º; 119/1989, de 3 de julio, FJ 4.º

⁵¹ Por todas, SSTCO 65/1988, de 13 de abril, FJ 4.º; 108/1988, de 8 de junio, FJ 2.º; 68/1989, de 19 de abril, FJ 2.º; 90/1989, de 11 de mayo, FFJJ 4.º y 9.º; 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º; 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º; 128/1991, de 6 de junio, FJ 3.º

finalidad solamente puede realizarse con eficacia otorgando al TCO facultades valorativas, porque de lo contrario se deja en manos de los órganos judiciales concretos la propia operatividad del PIAL.

Queda así completada la cuestión en el sentido de que no basta, a los efectos del PIAL, con que los órganos judiciales aporten sin más razones al cambio de doctrina, sino que, además, es necesario que éstas sean suficientes y razonables a juicio de nuestro TCO, de tal forma que la diferencia de trato, aun motivada, sin más base que la simple voluntad del juez se entendería como una discriminación injustificada y, por tanto, lesiva de los principios de igualdad y de seguridad jurídica.

Lo que ya no le corresponde al TCO es determinar cuál de las resoluciones contrastadas ofrece la solución más ajustada a Derecho, pues sería una cuestión de mera legalidad vedada al TCO por el artículo 55 LOTCO. De ahí que si el TCO aprecia que no existe un efectivo cambio de criterio, se limitará a otorgar el amparo solicitado, declarando la nulidad de la resolución que haya impedido el pleno ejercicio del derecho, y ordenando al órgano judicial que dicte una nueva resolución en la que, o bien aplique la doctrina anteriormente mantenida, o bien motive el cambio de la misma, pues ambas soluciones son válidas para lograr el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley⁵².

A continuación indicaré las vías mediante las cuales se puede exteriorizar el cambio de criterio y las razones que lo motivan; éstas han de quedar patentes y el TCO admite tres formas para ello⁵³:

— *Expresamente*: es decir, aportando alguna razón por la que se cambia de criterio, en relación con la doctrina anterior, y ello de forma explícita.

— *Tácitamente*: cuando la razón se desprende implícitamente de la propia resolución impugnada.

— Cuando la razón se desprende de los llamados por el TCO “*elementos de juicio externo*”; consiste en la existencia de posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea abierta por la resolución impugnada, los cuales ponen de manifiesto que el cambio de doctrina responde a criterios generales y no es un producto arbitrario del juzgador.

De estos elementos de juicio externo me interesa señalar dos cosas:

En primer término, que su admisibilidad es, cuanto menos, criticable si desde la misma se pretende que un cambio de criterio es válido por el mero hecho de venir refrendado por resoluciones posteriores. Esta interpretación, que parece ser la que acoge decididamente nuestro TCO para medir la racionalidad o, en su caso, la arbitrariedad de la decisión judicial, a mi modo de ver, no constituye garantía suficiente del derecho a la igualdad⁵⁴.

En segundo lugar, que, no obstante ello, si el TCO considera que estamos ante un cambio de criterio válido cuando, pese a no existir una clara motivación del mismo, ni expresa ni tácita, en la resolución judicial que lo introduce, sí existen, sin embargo, posteriores pronunciamientos coincidentes con aquélla —y ello porque estos elementos de juicio externo ponen de manifiesto que el cambio de doctrina obedece a criterios generales y que, por tanto, no es un producto arbitrario del juzgador—, necesariamente también tendrá que considerar el fenómeno opuesto. De esta forma, si los pronunciamientos posteriores del mismo órgano judicial en idénticos casos coincidieran no con la nueva línea abierta por la resolución que se impugna, sino con lo que venía siendo doctrina anterior de ese Tribunal, ello pondría de manifiesto que aquel cambio sí fue arbitrario por discriminatorio y que, por tanto, infringiría el PIAL; lo cual significa admitir, como ya indiqué, una cierta relevancia

⁵² En este sentido, DESDENTADO BONETE, A.: “Igualdad en la aplicación...”, *ob. cit.*, pág. 637, para quien “el carácter formal del control exige, en principio, que el pronunciamiento sea de reenvío”.

⁵³ Por todas, SSTCO 35/1988, de 2 de marzo, FJ 5.º; 55/1988, de 24 de marzo, FJ 3.º; 63/1988, de 11 de abril, FFJJ 2.º y 5.º; 108/1988, de 8 de junio, FJ 2.º; 128/1991, de 6 de junio, FJ 3.º

⁵⁴ Enseguida se abordará esta problemática.

de las resoluciones posteriores como término de comparación en manos del demandante de amparo.

Finalmente, analizaré los criterios con arreglo a los cuales nuestro TCO valora la racionalidad o, en su caso, la arbitrariedad de la decisión judicial.

Lógicamente, son muy variadas las razones aportadas en la práctica por los órganos judiciales al cambio de doctrina, si bien no todas ellas —como se sabe— son respetuosas con el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Es por ello, y como garantía de ese debido respeto, por lo que se hace imprescindible la intervención activa del TCO, ponderando la suficiencia o insuficiencia de las mismas. El verdadero problema radica en delimitar el criterio o criterios que puedan indicar qué es un fundamento “suficiente”, “objetivo”, “razonable”..., en términos de igualdad⁵⁵. Pues bien, nuestro TCO admite las siguientes clases distintas de motivaciones que pueden considerarse suficientes y razonables —por objetivas— y que, por tanto, todo órgano judicial puede aportar con éxito, a saber⁵⁶:

1. Que aprecie diferencias relevantes entre los supuestos que se le presenten como sustancialmente iguales y así lo ponga de manifiesto, explícita o implícitamente.
2. Que cambie de doctrina con respecto a su anterior criterio interpretativo por considerarlo “erróneo”, poniéndolo asimismo de manifiesto.
3. Por evolución de la realidad social a la que se aplica la norma y la necesaria adecuación a la misma (art. 3.1 del Código Civil).
4. Por evolución legislativa al respecto y su necesario acomodo.
5. Por sujeción a la doctrina jurisprudencial de los Tribunales Superiores.

Como puede verse, en todos estos casos el TCO respeta un margen de apreciación del juzgador —la discrecionalidad que es propia de todo órgano judicial—, si bien se trata de criterios de medida que parecen ser “razonables”⁵⁷, en ese difícil equilibrio que nuestro TCO pretende mantener entre la garantía de la igualdad y el respeto de la independencia judicial.

Lo que ya no parece tan “razonable” es la postura del TCO en virtud de la cual un cambio de criterio es válido —es decir, no arbitrario y, por tanto, respetuoso con el PIAL— por el mero hecho de aparecer como solución genérica y aplicable a casos futuros, en el entendimiento de que el cambio general de solución, por ser general, justifica por sí mismo el tratamiento diferente.

Así, el TCO, en su Sentencia 91/1990, de 23 de mayo, FJ 3.º, dirá que “el tratamiento diverso por parte del mismo órgano jurisdiccional de situaciones esencialmente similares, *vendrá justificado si es resultado de la adopción de nuevos criterios, de eficacia general y de aplicación continuada, en sustitución de los anteriormente mantenidos*”⁵⁸.

Más recientemente, y con una claridad meridiana, el TCO establece que “para valorar la efectiva

⁵⁵ GARCIA AMADO entiende que “en tanto no se profundice para explicar con carácter general aquellos criterios, siempre cabe pensar, como a veces se ha dicho, que se trata de una pura fórmula retórica para disfrazar la auténtica arbitrariedad, la del Alto Tribunal. Remitiéndose a la razonabilidad de la desigualdad no se adelanta nada, pues estamos ante una nueva noción que ha de ser cargada de contenido concreto” [“Problemas metodológicos del principio constitucional de igualdad”, en *Anuario de Filosofía del Derecho*, n.º 4 (Nueva Epoca), Madrid, 1987, pág. 123].

⁵⁶ Todas estas opciones de los Tribunales ordinarios han sido acogidas con éxito por el TCO en sus Sentencias 27/1988, de 23 de febrero, FJ 2.º; 63/1988, de 11 de abril, FJ 5.º; 200/1989, de 30 de noviembre, FJ 5.º; 42/1991, de 25 de febrero, FJ 2.º; 121/1991, de 3 de junio, FJ 6.º

⁵⁷ Entienden RODRIGUEZ PIÑERO, M. y FERNANDEZ LOPEZ, M. F. que “es en estos casos en los que existe un margen de apreciación o incluso una discrecionalidad, donde la igualdad en la aplicación de la ley puede ofrecer una apoyatura importante para forzar una actuación justa y no arbitraria en esa fase de aplicación de la ley” (“Igualdad y discriminación”, *ob. cit.*, págs. 21-22).

⁵⁸ El subrayado es mío.

existencia de la infracción constitucional denunciada hay que partir de las condiciones que este Tribunal ha establecido para que pueda hablarse de desigualdad en la aplicación de la ley, y que son no sólo el de la identidad de supuestos resuelta de forma distinta, sino también el que la desigual aplicación se realice sin causa razonable". A su vez, este segundo requisito ha sido minuciosamente desarrollado "en función de diversos criterios, entre los que destacan la posibilidad de apartarse de forma motivada del precedente, motivación que, sin ser necesariamente expresa, sí debe ser manifiesta y, en todo caso, ha de aparecer como solución genérica y aplicable a casos futuros y no como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo diverso.

*Es este último criterio, en definitiva, el que ha de resultar decisivo para valorar la existencia de desigualdad en la aplicación de la ley"*⁵⁹.

Entender que la pretensión de generalidad de la nueva decisión judicial que se aparta de sus precedentes satisface, sin más, la igualdad en la aplicación de la ley supone desconocer las verdaderas relaciones existentes entre el principio de igualdad y la generalidad de las normas⁶⁰, las cuales son clarificadas por LAPORTA en su estimulante trabajo *El principio de igualdad: Introducción a su análisis*:

"Se viene suponiendo usualmente que la generalidad de las normas consiste en que éstas tengan por destinatario, no individuos particulares, sino clases de individuos, de forma tal que puedan ser formuladas con expresiones del tipo "todos los A deben B". Desde ahí se conecta la generalidad con la igualdad, al suponer que mediante una norma de este tipo se trata igualmente a todos los individuos de la clase A, y se deduce de ello que si una norma particular (por ejemplo, una decisión judicial) estipula que "algún A no debe B" entonces se ha violado el principio de igualdad" (...). Pues bien, entiende LAPORTA que "la igualdad tiene que ver con la generalidad de las normas, pero más en relación con su contenido —obediente a un principio igualitario— que con su forma —las normas universales pueden ser, y de hecho son, con frecuencia, desigualitarias— y ello, simplemente, porque casi podría decirse que cualquier norma o decisión puede ser reformulada en términos generales (por ejemplo, los individuos de raza negra carecerán de derechos políticos y civiles)"⁶¹.

En el mismo sentido, RODRIGUEZ-PIÑERO, M. y FERNANDEZ LOPEZ, M. F.; consideran que "la mera fórmula de regulación general y abstracta, y de la aplicación igual de la ley, no es garantía suficiente de la igualdad"⁶².

Trasladando estas sugerentes ideas al plano estricto de la igualdad en la aplicación de la ley sucede que es éste un criterio que, pese a su indudable objetividad, no mide realmente el grado de racionalidad de la decisión cuestionada, ni su adecuación al principio de igualdad que se pretende tutelar.

La pretensión de generalidad constituye una justificación inicial de la decisión judicial en cuestión —"toda decisión concreta que se pretenda igualitaria tiene que poder apelar, *prima facie*, a normas universales"⁶³—, pero no constituye, por sí misma, garantía suficiente del derecho a la igualdad. Por ello es conveniente no olvidar esos otros criterios de control de la igualdad en la aplicación de la ley, manejados por el TCO en algunas de sus decisiones, y a los que ya se ha hecho referencia, sin duda más respetuosos con el tan mencionado principio de igualdad.

SUAY RINCON, al preguntarse sobre el parámetro que ha de utilizarse para medir la razonabilidad o, en su caso, la arbitrariedad del órgano judicial considera que "la razonabilidad de la actuación judicial (o administrativa) se va a medir respecto de la propia norma aplicable al caso

⁵⁹ STCO 200/1990, de 10 de diciembre, FJ 3.º El subrayado es mío. En el mismo sentido, las SSTCO 63/1988, de 11 de abril, FJ 2.º; 108/1988, de 8 de junio, FJ 2.º; 1/1990, de 15 de enero, FJ 4.º

⁶⁰ Se habla de normas en un sentido material, comprensivo también de las decisiones judiciales: éstas son normas particulares.

⁶¹ LAPORTA, F.: "El principio de igualdad: Introducción a su análisis", en *Sistema*, n.º 67, julio 1985, págs. 6-7.

⁶² "Igualdad y discriminación", *ob. cit.*, pág. 49.

⁶³ LAPORTA, F.: "El principio de igualdad...", *ob. cit.*, pág. 10.

suscitado. De esta forma, serán razonables todas aquellas resoluciones que sean congruentes, deducibles racionalmente de la norma aplicable, y arbitrarias las que no lo sean”⁶⁴.

Pero esta opción —sin duda más acorde con las exigencias del principio de igualdad que la actuada por el TCO español— exigiría una actitud más activa del mismo, supervisando el modo y manera de interpretación y de aplicación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales, actitud que, si bien ha sido asumida por aquél cuando quedan afectados los derechos fundamentales y las libertades públicas⁶⁵, sorprendentemente ha sido rechazada categóricamente cuando lo que está en juego es la igualdad en la aplicación de la ley⁶⁶, efectuando así una valuación de los principios en juego —hipervaloración de la independencia judicial en detrimento del principio de igualdad— que es, cuanto menos, discutible.

⁶⁴ SUAY RINCON, J.: *El principio de igualdad en la justicia constitucional*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1985, pág. 188.

⁶⁵ Por todas, STCO 54/1988, de 24 de marzo, FJ 2.º: “En efecto, como ya se advertía en la STCO 18/1988, de 16 de febrero, es ajena al recurso de amparo la forma en que se aplique la legalidad ordinaria, lo cual corresponde en exclusiva a los jueces y Tribunales, según el artículo 117.3 de la Constitución, siempre y cuando no venga fundada en interpretación incompatible con la protección debida a dichos derechos y libertades”.

⁶⁶ STCO 144/1988, de 12 de julio, FJ 3.º: “La función de este Tribunal como Tribunal de amparo no es la misma cuando el derecho fundamental cuya lesión se imputa al órgano judicial, es alguno de los comprendidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de nuestra Constitución, que cuando lo que se supone vulnerado es el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 y tal vulneración se dice producida por una diferencia en la interpretación. En el primer caso nuestra competencia implica la facultad de determinar si la interpretación judicial de la Ley es conforme o no con la Constitución y nuestra decisión, excluyendo interpretaciones constitucionalmente ilegítimas es vinculante para todos los jueces y Tribunales como expresamente reconoce la LOPJ (art. 4.1). En el segundo, y en cuanto ninguna de las interpretaciones divergentes resulte contraria a la Constitución, el problema que la divergencia plantea, sólo puede ser traído ante nosotros cuando quien se sienta víctima de una interpretación discriminatoria de la Ley pueda ofrecer razones que le autoricen a pensar que la divergencia interpretativa es simplemente la cobertura formal de una decisión, cuyo sentido diverso al de otras resoluciones anteriores y, eventualmente posteriores, se debe realmente al hecho de que se han tomado en consideración circunstancias personales o sociales de las partes, incluso simplemente su propia identidad, que no debieron serlo”.

ANEXO: JURISPRUDENCIA CONSULTADA

- STCO 27/1988, de 23 feb. RA n.º 85/1987. BOE 18 marzo 1988.
- STCO 35/1988, de 2 mar. RA n.º 302/1985. BOE 18 marzo 1988.
- STCO 42/1988, de 15 mar. RA n.º 491/1987. BOE 12 abril 1988.
- STCO 51/1988, de 22 mar. RA n.º 130/1987. BOE 13 abril 1988.
- STCO 54/1988, de 24 mar. RA n.º 1430/1986. BOE 13 abril 1988.
- STCO 55/1988, de 24 mar. RA n.º 254/1987. BOE 13 abril 1988.
- STCO 63/1988, de 11 abr. RA n.º 252/1987. BOE 4 mayo 1988.
- STCO 65/1988, de 13 abr. RA n.º 91/1987. BOE 4 mayo 1988.
- STCO 73/1988, de 21 abr. RA n.º 930/1986. BOE 5 mayo 1988.
- STCO 83/1988, de 28 abr. RA n.º 122/1987. BOE 25 mayo 1988.
- STCO 99/1988, de 31 may. RA n.º 169/1987. BOE 25 junio 1988.
- STCO 108/1988, de 8 jun. RA n.º 176/1987. BOE 25 junio 1988.
- STCO 109/1988, de 8 jun. RA n.º 453/1987. BOE 25 junio 1988.
- STCO 117/1988, de 20 jun. RA n.º 1370/1986. BOE 12 julio 1988.
- STCO 120/1988, de 20 jun. RA n.º 1048/1987. BOE 12 julio 1988.
- STCO 122/1988, de 22 jun. RA n.º 1384/1986. BOE 12 julio 1988.
- STCO 126/1988, de 24 jun. RA n.º 1405/1986. BOE 12 julio 1988.
- STCO 127/1988, de 24 jun. RA n.º 980/1987. BOE 12 julio 1988.
- STCO 130/1988, de 4 jul. RA n.º 186/1987. BOE 27 julio 1988.
- STCO 131/1988, de 4 jul. RA n.º 330/1987. BOE 27 julio 1988.
- STCO 132/1988, de 4 jul. RA n.º 432/1987. BOE 27 julio 1988.
- STCO 134/1988, de 4 jul. RA n.º 790/1987. BOE 27 julio 1988.
- STCO 135/1988, de 4 jul. RA n.º 1134/1987. BOE 27 julio 1988.
- STCO 136/1988, de 4 jul. RA n.º 1376/1987. BOE 27 julio 1987.
- STCO 144/1988, de 12 jul. RA n.º 737/1987. BOE 8 agosto 1988.
- STCO 155/1988, de 22 jul. RA n.º 751/1985. BOE 24 agosto 1988.
- STCO 162/1988, de 22 sep. RA n.º 568/1987. BOE 14 octubre 1988.
- STCO 165/1988, de 26 sep. RA n.º 562/1987. BOE 14 octubre 1988.
- STCO 166/1988, de 26 sep. RA n.º 988/1987. BOE 14 octubre 1988.
- STCO 173/1988, de 3 oct. RA n.º 181/1987. BOE 5 noviembre 1988.
- STCO 177/1988, de 10 oct. RA n.º 450/1985. BOE 5 noviembre 1988.
- STCO 190/1988, de 17 oct. RA n.º 547/1987. BOE 7 noviembre 1988.
- STCO 253/1988, de 20 dic. RA n.º 1194/1986. BOE 13 enero 1989.
- STCO 9/1989, de 23 en. RA n.º 1582/1987. BOE 10 febrero 1988.
- STCO 19/1989, de 31 en. RA n.º 1152/1986. BOE 28 febrero 1989.
- STCO 68/1989, de 19 abr. RA n.º 114/1987. BOE 19 mayo 1989.
- STCO 73/1989, de 20 abr. RA n.º 1356/1987. BOE 22 mayo 1989.
- STCO 84/1989, de 10 may. RA n.º 405/1987. BOE 13 mayo 1989.
- STCO 90/1989, de 11 may. RA n.º 841/1987. BOE 14 junio 1989.
- STCO 115/1989, de 22 jun. RA n.º 728/1987. BOE 24 julio 1989.
- STCO 119/1989, de 3 jul. RA n.º 1236/1987 y 212/1988 (acumulados). BOE 24 julio 1989.
- STCO 152/1989, de 2 oct. RA n.º 1461/1987. BOE 7 noviembre 1989.
- STCO 161/1989, de 16 oct. RA n.º 1402/1987. BOE 7 noviembre 1989.
- STCO 162/1989, de 16 oct. RA n.º 1420/1987. BOE 7 noviembre 1989.
- STCO 180/1989, de 3 nov. RA n.º 454/1987. BOE 4 diciembre 1989.



- STCO 200/1989, de 30 nov. RA n.º 505/1987. *BOE* 5 enero 1990.
- STCO 1/1990, de 15 en. RA n.º 1732/1987. *BOE* 15 febrero 1990.
- STCO 49/1990, de 26 mar. RA n.º 1596/1987. *BOE* 17 abril 1990.
- STCO 77/1990, de 26 abr. RA n.º 1380/1987. *BOE* 30 mayo 1990.
- STCO 82/1990, de 4 may. RA n.º 319/1988. *BOE* 30 mayo 1990.
- STCO 90/1990, de 23 may. RA n.º 1551/1987. *BOE* 20 junio 1990.
- STCO 91/1990, de 23 may. RA n.º 112/1988. *BOE* 20 junio 1990.
- STCO 103/1990, de 4 jun. RA n.º 617/1988. *BOE* 5 julio 1990.
- STCO 135/1990, de 19 jul. RA n.º 779/1988. *BOE* 30 julio 1990.
- STCO 149/1990, de 1 oct. RA n.º 2412/1989. *BOE* 23 octubre 1990.
- STCO 166/1990, de 29 oct. RA n.º 986/1988. *BOE* 30 noviembre 1990.
- STCO 199/1990, de 10 dic. RA n.º 1177/1988 y 1178/1988 (acumulados). *BOE* 10 enero 1991.
- STCO 200/1990, de 10 dic. RA n.º 1236/1988. *BOE* 10 enero 1991.
- STCO 2/1991, de 14 en. RA n.º 1007/1988. *BOE* 13 febrero 1991.
- STCO 5/1991, de 14 en. RA n.º 1304/1988. *BOE* 25 febrero 1991.
- STCO 42/1991, de 25 feb. RA n.º 1390/1988. *BOE* 27 marzo 1991.
- STCO 48/1991, de 28 feb. RA n.º 740/1988. *BOE* 27 marzo 1991.
- STCO 111/1991, de 20 may. RA n.º 95/1989. *BOE* 19 junio 1991.
- STCO 121/1991, de 3 jun. RA n.º 1865/1988. *BOE* 8 julio 1991.
- STCO 128/1991, de 6 jun. RA n.º 1281/1988. *BOE* 8 julio 1991.
- STCO 134/1991, de 17 jun. RA n.º 133/1989. *BOE* 8 julio 1991.